

C.A. de Temuco

Temuco, siete de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos autos seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, RUC n° 18- 4-0115411-2 y RIT n° O-504-2018, con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva. A través de la misma, la sentenciadora y Juez Titular de aludido Tribunal, Sra. Mónica Soto Silva, rechazó la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, cobro de prestaciones y nulidad de despido, interpuesta por PABLO ALFONSO PORRAS MONTERREY, en contra de la CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI, sin costas.

Contra el aludido fallo, recurrió de nulidad la parte demandante, fundando su impugnación primeramente en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo y en subsidio, en la contemplada en el artículo 478 b) del mismo cuerpo legal.

Luego de explicar el por qué en su concepto concurren las aludidas causales, solicita lo siguiente, de manera textual:

“Que la sentencia de autos sea anulada, dictando la Ilustrísima Corte de Apelaciones la respectiva sentencia de reemplazo, declarando que:

I.- Entre la demandada y mi representado existió relación laboral entre el día 14 de agosto de 2014 hasta el 03 de mayo de 2018, bajo las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° Y 8° del Código del Trabajo.

II.- La continuidad de los servicios prestados por mi mandante a favor de la CONADI desde el día 14 de agosto de 2014 hasta el 03 de mayo de 2018.

III.- Que el despido fraguado por la demandada CONADI es injustificado, por lo que la demandada adeuda las siguientes indemnizaciones y prestaciones que se señalan:



Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de 1.845.000.- (un millón ochocientos cuarenta y cinco mil pesos), o la que VS., conforme al mérito de autos, en justicia y equidad, determine.

Indemnización por años de servicios, correspondientes a cuatro años de servicios, en virtud del inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, por la suma de \$7.380.000.- (siete millones trescientos ochenta mil pesos), o la que VS., conforme al mérito de autos, en justicia y equidad, determine.

En virtud de la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, el recargo legal del 50% de las indemnizaciones por años de servicios equivalente a la suma de \$ 3.690.000.- (tres millones seiscientos noventa mil pesos), o la que VS., conforme al mérito de autos, en justicia y equidad, determine.

Feriado legal y proporcional, por la suma de \$2.613.750.- (dos millones seiscientos trece mil setecientos cincuenta pesos) conforme a la base de cálculo de una remuneración ascendente a la suma de \$1.845.000.- (un millón ochocientos cuarenta y cinco mil pesos), o la que VS., conforme al mérito de autos, en justicia y equidad, determine.

Pago de Cotizaciones de seguridad social impagas durante todo el período que duró la relación laboral, según liquidación que practique el tribunal, por suma de \$26.433.594.- (veintiséis millones cuatrocientos treinta y tres mil pesos) conforme a la base de cálculo de una remuneración ascendente a la suma de \$1.845.000.-, o la que VS., conforme al mérito de autos, en justicia y equidad, determine.

Pago de Horas extras por la suma de \$1.750.000.- (un millón setecientos cincuenta mil pesos), conforme a la base de cálculo de una remuneración ascendente a la suma de \$1.845.000.-, o la que VS., conforme al mérito de autos, en justicia y equidad, determine.

Las sumas que correspondan por la nulidad del despido en virtud de los incisos quinto y sexto del artículo 162 del Código del Trabajo, por concepto de remuneraciones y demás prestaciones desde la fecha



del despido, esto es desde el 03 de mayo de 2018 hasta la convalidación de este.

Indemnización por concepto de lucro cesante por la suma de \$14.760.000.- (catorce millones setecientos sesenta mil pesos) por el periodo de trabajo que mi representado pudo haber prestado servicios de no mediar el despido injustificado, esto es desde el 04 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2018, o la que VS., conforme al mérito de autos, en justicia y equidad, determine.

IV.- Que, se condene a la demandada al pago de las costas de la causa.

Tras de la tramitación de rigor, se procedió a la vista de la causa en audiencia pública, a la que comparecieron los apoderados de ambas partes, quedando tras ello la causa en estudio y luego en estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

Primero: Que como se ha expresado en la parte expositiva, la causal principal fundante del recurso de nulidad deducido por el actor, es aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, que señala que *“Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos”*. Luego de explayarse sobre las características de la relación contractual que le vinculó con la demandada y las circunstancias de término de dicha convención, funda su recurso, señalando que el Tribunal desestimó íntegramente la demanda, al estimar estar en presencia de un contrato a honorarios, sin considerar toda la prueba aportada que acreditó la existencia de una relación laboral entre las partes y el despido injustificado, vulnerando lo preceptuado en los artículos 1º, 7º y 8º del Código del Trabajo, en



relación al artículo 11° de la ley N° 18.834. A continuación, el recurrente transcribe los considerandos 6°, 8° a 14° de la sentencia que se revisa, destacando que erróneamente la sentenciadora concluye que los elementos acreditados que configuran la subordinación y dependencia, no hacen aplicable el artículo 7° y 8° del Código del Trabajo, ya que dichas condiciones pueden ser establecidas en un contrato a honorarios amparado por el artículo 11° del estatuto administrativo. Subraya que en el caso de marras, se logró acreditar que CONADI excedió el marco normativo del artículo 11° del cuerpo legal citado, ya que la prestación de servicios no encuadra en ninguna de las hipótesis normativas señaladas en dicha norma; es por ello que la infracción a las mencionadas normas del Código del Trabajo se configuran al desconocer los elementos que permiten determinar la existencia de subordinación y dependencia, amparándose en una norma que no es aplicable al caso de marras. Destaca que el artículo 8° del Código del Trabajo, establece una presunción, en la cual se tiene por contrato de trabajo la prestación de servicios personales, en tanto concurren los elementos de subordinación y dependencia, aun cuando las partes le hayan dado otra denominación a la respectiva relación jurídica, de suerte que estaremos en presencia de un contrato de trabajo si en la práctica se dan los elementos señalados, no obstante haberse suscrito un convenio de otra naturaleza, como se da claramente en el presente caso. Destaca que es cierto que los órganos de la administración del Estado se encuentran facultados para suscribir contratos de prestación de servicios a honorarios, no obstante ello, deben concurrir ciertas y determinadas condiciones las que están expresamente indicadas en el artículo en comento, las que concurrían en la especie, pues las labores desarrolladas por el actor no eran accidentales ni de cometidos específicos. Resalta que un elemento determinante dice relación con la extensión de la labor o función contratada, pues de manera excepcional puede tratarse de labores propias y habituales del servicio, en efecto, el hecho de tratarse de un



programa no dota la labor de transitoriedad, menos en CONADI, pues de la lectura de la ley 19.253 se aprecia que los programas no son cuestiones transitorias de la institución muy por el contrario es un mecanismo o una forma de actuar y en concreto de cumplir los fines institucionales, verbigracia el artículo 23 de la citada norma, contempla la creación de un fondo para financiar programas a la letra señala “*Créase un Fondo de Desarrollo Indígena cuyo objeto será financiar programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas, el que será administrado por la Corporación*”, el artículo 32 contempla la posibilidad de financiar programas permanentes o experimentales (única norma donde se hace distinción), se contempla “*programa de beca indígena*” que es de público y notorio conocimiento ha sido absolutamente permanente; el artículo 42 de la misma ley entrega al consejo nacional la función de aprobar diferentes programas sin distinción de ser transitorios o permanentes, entre otras normas, en definitiva, resalta el recurrente, la circunstancia de tratarse de un programa en nada altera la situación del trabajador, pues no es relevante la denominación que se quiera dar a la función o ámbito en que se despliega la función, sino atender el principio de la primacía de la realidad, superando por cierto la creencia de que programa sea identificable a transitoriedad. Hoy, además, la permanencia del programa viene dada por la reciente aprobación del presupuesto para la ejecución del Programa Chile Indígena CONADI de la región de la Araucanía para el año 2019 por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), lo que desvirtúa absolutamente la tesis de la contraria en relación a la supuesta transitoriedad del programa por tener una vigencia finita hasta el año 2018. Destaca sobre el punto que se viene hablando, que su representado fue contratado de forma sucesiva e ininterrumpida desde el 14 de agosto de 2014 al 03 de mayo de 2018, y en lo que respecta a los cometidos específicos, el Tribunal pasa por alto una cuestión determinante, y es que dicho cometido debe estar especificado en el propio contrato, no siendo admisible que se haya



cumplido dicha exigencia al encomendar la realización de cualquier otra labor que le encomiende su jefatura o el Director Nacional u otra autoridad, puesto que siguiendo lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en jurisprudencia de la materia, dichos cometidos para entenderlos dentro de la autorización legal debe entonces ser tareas puntuales, perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente. Destaca finalmente que también se ha producido una errada interpretación del artículo 11º de la ley 18.834, pues únicamente se ha puesto atención en orden a la facultad de suscribir un contrato y no en relación a la concurrencia de los elementos que señala el artículo 7º del Código del Trabajo, a saber, subordinación y dependencia, y sus manifestaciones. Señala por último que la infracción referida precedentemente ha influido en lo dispositivo del fallo, circunstancia que es evidente e incuestionable, ya que según se aprecia del fallo respectivo, el juez habiendo tenido prueba suficiente para verificar la concurrencia de elementos característicos de la subordinación y dependencia, desestimó la demanda íntegramente, atendido a que no se habrían acreditado en forma fehaciente la existencia de relación laboral de subordinación y dependencia de su representado para CONADI.

Segundo: Que debe subrayarse, que al fundarse el recurso en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, la existencia de una infracción de ley en el pronunciamiento de la sentencia que influye en su parte dispositiva, para que el recurso pueda prosperar, se requiere que exista un error en la aplicación de una norma decisoria litis, sea de naturaleza procesal o sustantiva; todo lo cual supone la mantención del establecimiento fáctico de la sentencia; en otros términos, los hechos determinados por el juez, resultan inamovibles para el tribunal que conoce del recurso, limitándose la discusión al derecho aplicable al caso. Pues bien, revisada la sentencia impugnada,



se verifica que se establecen como hechos de la causa, en el considerando sexto, los siguientes:

A) Que el actor prestó servicios desde el 14 de agosto de 2014 y hasta el 03 de diciembre de 2016, en virtud de sucesivos contratos a honorarios a suma alzada, suscritos con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, verificándose que el último contrato suscrito con fecha 01 de enero de 2018 y que se encontraba vigente a la poca del término de sus servicios, tenía una duración fijada hasta el 31 de diciembre de 2018.

B) Que los servicios prestados por el actor para Conadi lo fueron para la ejecución del Programa Chile Indígena, estando adscrita su contratación a dicho programa, cumpliendo funciones durante el periodo que duró su contratación, desde el año 2014 al 2017, como profesional de apoyo regional de la Unidad Técnica del Programa Chile Indígena, como señalan sus respectivos contratos y en el año 2018, consta asumió funciones de Gestor Territorial Regional del Programa Chile Indígena.

C) Que las labores del actor importaban el cumplimiento de las órdenes e instrucciones de sus superiores, estaban afectos a fiscalización superior inmediata a través de la presentación de informes, que por las labores realizadas recibía un ingreso mensual, que se le otorgaban feriados y permisos administrativos, además estaba afecto al cumplimiento de horario y jornada de trabajo y a descuentos en el caso de incumplimiento, efectuándosele la devolución y pago de los gastos incurridos por la ejecución de sus labores cuando debían cumplir éstas fuera de su residencia habitual.

Tercero: Que, no obstante dar por establecidas dichas circunstancias de hecho en la relación contractual que vinculó a demandante y demandada, la sentenciadora concluyó la inexistencia de una relación laboral, y por el contrario, estableció la concurrencia de una a honorarios. Para determinar aquello, tuvo presente lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 15 de la Ley 18.575, en el artículo 11 de la



ley 18.834, en relación a los artículos 52 y 53 de la Ley 19.253, normas de las que concluye que *“es dable concluir que Conadi se encuentra expresamente facultada para celebrar contratos a honorarios, como los celebrados con el actor, por lo anterior, no es dable admitir que quienes prestan servicios contratados por los órganos del Estado, mediante la celebración de contratos de prestación de servicios a honorarios, puedan regirse por el Código del Trabajo, en razón de lo establecido, en el inciso final del artículo 11 del Estatuto Administrativo y artículo 53 de la Ley 19.253, teniendo en consideración además lo establecido en el inciso 3° del artículo 1° del Código del Trabajo, que establece que las normas de dicho código se aplicaran supletoriamente a los funcionarios de la administración centralizada y descentralizada del Estado, en los aspectos materias no reguladas en los respectivos estatutos a que se hayan sujetos y siempre que no fueron contrarias a estos últimos”*. Añadió como argumento que las condiciones en que se verificó la relación contractual entre las partes, pueden estipularse en un contrato remunerado de honorarios, a cuyas reglas se remite, en forma explícita el citado artículo 11 del Estatuto Administrativo, al establecer el sistema propio de las personas contratadas a honorarios y que resultan asimilables al arrendamiento de servicios profesionales regido por el derecho común. Agregó luego al sentenciadora que el principio de legalidad, recogido en normas que son de orden público y en cuya virtud y observancia la demandada está facultada para contratar personal regulado por el Código del Trabajo, ya que su normativa legal no contempla tal forma de contratación, necesario es concluir que su condición no es la propia de un empleador definido en el artículo del Código del Trabajo, y mal podría estimarse infundada o arbitraria la terminación de los servicios del actor, al haberse verificado estos conforme lo pactado en los propios contratos de prestación de servicios que facultan al término anticipado de estos y si bien se había estipulado para estos casos, una comunicación con a lo menos 30 días, la inobservancia de aquello, tampoco hace estimar una



prestación de carácter laboral. Arguye finalmente que los servicios prestados por el actor, lo fueron para un programa gubernamental finito en el tiempo, uno más de los tantos programas que la Corporación demandada puede llevar a cabo para cumplir los objetivos que le son propios conforme lo señalado en el artículo 39 de la Ley 19253, en este caso el Programa Chile Indígena, programa que como consta de la Resolución Exenta N° 503 que Aprueba Reglamento General del Programa Chile Indígena, incorporado en autos y que señala en su artículo 3° que la ejecución del Programa se efectuará en el periodo comprendido entre los años 2013 a 2018.

Cuarto: Que la parte recurrente estima que dicho razonamiento infringe la Ley, puntualmente lo dispuesto en el artículo 11° de la ley 18.834, el que habría sido mal interpretado, pues la sentenciadora habría puesto atención únicamente en orden a la facultad de suscribir un contrato y no en relación a la concurrencia de los elementos que señala el artículo 7° del Código del Trabajo, a saber, subordinación y dependencia, y sus manifestaciones, estimando entonces también vulnerada dicha norma junto a los artículo 1 y 8 del mismo cuerpo legal.

Quinto: Que para una adecuada decisión de la controversia jurídica que plantea el recurrente, resulta conveniente en primer lugar tener presente lo que señalan las normas referidas por el actor. Así, el artículo 1 del Código del Trabajo, prescribe: *“Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.*

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.



Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 18.834, indica que *“Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

Sexto: Que, acorde con la normativa hasta ahora reproducida, la premisa está constituida por la vigencia del Código del Trabajo respecto de todas las vinculaciones de índole laboral habidas entre empleadores y trabajadores, y se entienden por tal, en general, aquellas que reúnen las características derivadas de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7 del ordenamiento aludido, esto es, la relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha tarea, donde la presencia de aquéllas constituye el elemento esencial determinante y distintivo de una relación de este tipo.



Séptimo: Que, en el reseñado artículo 1 del Código del Trabajo, se consignan, además de la ya indicada premisa genérica, una excepción a la aplicación de esta compilación al personal de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, salvedad restringida únicamente al evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Empero, también encierra una contra excepción que abarca a todos los trabajadores de los entes detallados, a quienes se vuelve a la vigencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que no sean contrarios a estos últimos. En otros términos, se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado no acogidos por ley a un estatuto especial y, aun de contar con dicho régimen peculiar, en carácter de subsidiario, sobre los aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco jurídico.

Octavo: Que, por otra parte, es importante tener en consideración que el contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

Noveno: Que los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica, constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las



que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.

Décimo: Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

Décimo primero: Que, entonces, la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 11 de la Ley N° 18.834, está dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el Código del ramo. Es decir, corresponde calificar como vinculaciones



laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N° 18.884, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

Décimo segundo: Que tal decisión no implica desconocer la facultad de la Administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 11 de la Ley N° 18.834, por la que no se vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado Código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 11, siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado, pueda contar con la asesoría de expertos en asuntos precisos, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales.

Décimo tercero: Que es justamente la determinación de estos tópicos de especificidad y ocasionalidad que deben ser esclarecidos para después decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar qué son “labores accidentales y no habituales”, siendo aquéllas las que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente.



Decimo cuarto: Que, en consecuencia, para resolver la *litis* se debe establecer si la demandante en el ejercicio de las funciones que le fueron cometidas desplegó un quehacer específico y acotado en el tiempo –como lo ordena el citado artículo 11 de la Ley N° 18.834-, o si, por el contrario, desarrolló una labor permanente bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador. En tal virtud, la sentenciadora del grado estableció que el actor prestó servicios para la CONADI, a contar del 14 de agosto de 2014, en virtud de sucesivos contratos de honorarios a suma alzada, siendo los servicios prestados como Gestor Territorial Regional del Programa Chile Indígena, estando adscrita su contratación a dicho programa. En el mismo sentido, se determinó que se pactó un honorario que se pagaba mes a mes, que cumplía un horario y jornada, que estaba sujeto al cumplimiento de órdenes e instrucciones de sus superiores.

Décimo quinto: Que conforme lo dispone la Ley que crea la CONADI, dicha entidad actúa a través de programas que no son transitorios, y por el contrario, son la forma de concretar los fines institucionales. Así, el artículo 23 de la Ley 19.253 contempla la creación de un fondo para financiar programas, señala “*Créase un Fondo de Desarrollo Indígena cuyo objeto será financiar programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas, el que será administrado por la Corporación*”; por su parte el artículo 42 de la misma ley entrega al consejo nacional la función de aprobar diferentes programas sin distinción de ser transitorios o permanentes. Por su parte, el aludido consejo por Acuerdo N° 33/2012, en Primera Sesión Extraordinaria, dio aprobación al Programa de asistencia a comunidades indígenas, denominado “Chile Indígena”, a su vez, por Resolución Exenta N° 503 de fecha 19 de abril de 2013, del Director Nacional de la CONADI, se aprobó el Reglamento General del mentado programa estableciéndose en su artículo 3 que la ejecución del mismo se efectuaría en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2018.



Décimo sexto: Que el Programa para el cual fue contratado el actor, tenía por objeto financiar actividades de atención de las comunidades indígenas, actividades que se determinan en terreno con las comunidades beneficiadas. Así, cabe concluir que el Programa en cuestión tenía como objetivo específico y prioritario, el de asistir a comunidades indígenas, concretando de esa forma el objetivo de la CONADI, que no es otro que promover, coordinar y ejecutar en su caso, la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida social.

Décimo séptimo: Que, así las cosas, del análisis conjunto de las normas reproducidas y del carácter del Programa en que se desempeñaba como Encargado Regional el actor, aparece que el mismo es una modalidad a través de la cual la CONADI cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello.

Décimo octavo: Que por ser funciones propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que la de autos, se trata de una relación contractual amparada por el artículo 11 de la Ley 18.834, sino más bien, una que, dado los caracteres no controvertidos que tuvo y que se dieron por establecidos en la sentencia que se revisa, está sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho Código.

Décimo noveno: Que, en semejante supuesto, corresponde aplicar las normas del referido estatuto a todos los vínculos de orden laboral que se generan entre empleadores y trabajadores, y debe entenderse por tal aquéllos que reúnen las características que surgen de la definición que de contrato de trabajo consigna el artículo 7 del Código del ramo, o sea, que se trate de servicios personales,



intelectuales o materiales que se prestan bajo un régimen de dependencia o subordinación, por los que se paga una remuneración.

Vigésimo: Que, por último, es útil tener presente que para determinar el estatuto aplicable a una persona que se desempeña en un organismo de la Administración del Estado no procede considerar únicamente los términos de los respectivos documentos conforme a los cuales el trabajador se incorporó a la dotación, tampoco los acuerdos arribados por las partes, sino lo que sucede en la práctica, criterio protector que la doctrina laboral denomina “*la primacía de la realidad*”, y que en la legislación del ramo recoge el inciso primero del artículo 8 del Código del Trabajo, en la medida que señala que toda prestación de servicios en los términos descritos en el artículo 7 del mismo, esto es, de carácter personal, contra el pago de una remuneración y bajo subordinación o dependencia, hace presumir la existencia de un contrato laboral, y cuya principal expresión se da cuando se intenta soslayar la existencia de un trabajador dependiente bajo la apariencia de ser uno independiente contratado a honorarios, lo que obliga a desentrañar la verdadera naturaleza de la prestación.

Vigésimo primero: Que, de los supuestos fácticos descritos en el razonamiento segundo, se evidencia que el demandante desarrolló la labor encomendada bajo vínculo de subordinación y dependencia, esto es, en dependencias de la demandada, en horarios y bajo las instrucciones que ella dispuso, por lo que, corresponde encuadrar la situación del actor en la normativa que contiene el Código del Trabajo, y atendido que los servicios prestados, como se especificó, se efectuaron conforme los requisitos que, al efecto, contempla el artículo 7 del citado texto legal, consecuentemente, no se insertan en la normativa especial del artículo 11 de la Ley N°18.834, razón por la cual, el vínculo contractual se rige por el texto normativo antes indicado, es decir, el Código del Trabajo.

Vigésimo segundo: Que, en estas condiciones, yerra el sentenciador del grado al calificar la relación contractual del litigante



como una que se enmarcó dentro del régimen especial del Estatuto Administrativo y, estimando, consecuentemente inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta desplegada por el actor en el ejercicio de su labor, no cumple los requisitos que la norma especial exige. Conforme a lo razonado y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de nulidad deberá ser acogido.

Vigésimo tercero: Que atendido lo concluido, aparece innecesario pronunciarse sobre la causal subsidiaria interpuesta en el recurso de nulidad del actor.

Y, atendido, además, a lo dispuesto en los artículos 477, 479 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

Que **SE ACOGE, con costas**, el Recurso de Nulidad deducido por el apoderado de la parte demandante Sr. Cristián Salinas Pérez, contra la sentencia definitiva de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada por doña Mónica Soto Silva, Juez Titular del Juzgado del Trabajo de Temuco, la que por consiguiente es NULA y se reemplaza por la que se dicta acto continuo, sin nueva vista, con arreglo a la ley.

Incorpórese la presente resolución a la carpeta digital correspondiente.

Redacción del Abogado Integrante Alexis Salvador Gómez Valdivia.

Rol N°Laboral - Cobranza-433-2018.



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros Sr. Aner Ismael Padilla B., y Sra. María Elena Llanos M. No firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, el Abogado Integrante Sr. Alexis Gómez V., por encontrarse ausente. Temuco, siete de marzo de dos mil diecinueve.

En Temuco, a siete de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.